

Las ventajas de apellidarse Frei

“En el año 1981, entre el 22 de julio y el 7 de agosto, el comandante Fuenzalida me telefoneó para que fuera a buscar un paquete a la Cancillería. En esos días yo me hallaba con yeso, por lo que me trasladé en auto hasta el lugar. La Cancillería estaba en La Moneda, donde se me hizo firmar un documento y se me entregó un paquete pequeño. Al llegar al instituto abrí el paquete y extraje un tubo con la leyenda *Clostridium Botulinum*, el que procedí a guardar inmediatamente en el refrigerador por tratarse de una bacteria bastante peligrosa”. Marcos Poduje Frugone, químico farmacéutico, quien trabaja actualmente en el departamento de liofilización del ISP.

El viernes 13 de octubre de 2000, el entonces subsecretario del Interior, el demócrata cristiano Jorge Burgos, activó el citófono e indicó a su secretaria que los convocados podían pasar a su oficina. El primero en entrar fue el director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery. La puerta se cerró y ambos se saludaron cordialmente.

La mirada de Mery, típica de un detective, auscultó el lugar, la vestimenta del secretario de Estado y el cuadro del Presidente Ricardo Lagos que siempre está en las oficinas gubernamentales como señal de lealtad. Tomó asiento, al tiempo que ingresaban los otros dos citados: el abogado Jorge Morales –actual asesor del subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil y ex miembro de Investigaciones–, junto a la jefa del Departamento de Narcotráfico y Lavado de Dinero del Consejo 166 de Defensa del Estado (CDE), María Teresa Muñoz. El encuentro no era una simple reunión. La materia que tratarían, tampoco.

Dos días antes, la senadora del partido del subsecretario, Carmen Frei, había denunciado a viva voz en la hora de incidentes en el hemiciclo parlamentario que su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, pudo haber sido envenenado por Eugenio Berríos.

Algo había que hacer; mal que mal, Frei pertenecía al mismo partido del subsecretario y había que descartar si en realidad había delito.

Básicamente, las pruebas que Carmen Frei entregó a la prensa y en el hemiciclo parlamentario eran “dudas razonables”. Su padre, uno de los posibles aglutinadores de las fuerzas de oposición al régimen militar, moría en una clínica, luego de una operación de rutina, por una extraña complicación que le sobrevino con bacteria *Proteus*.

En todo caso, no era la primera vez que los Frei hablaban de estas sospechas, ya el 12 de enero de 1999, Eugenio Ortega Frei, había hecho declaraciones similares al diario argentino *Página 12*. Pero en concreto, Carmen Frei insistía en que la autopsia de su padre había desaparecido, que también se

halló la bacteria “Proteus”, según dijo, casi desconocida en el Chile de la época.

En la clínica, sin embargo decían que no existió la necropsia. El médico cirujano Augusto Larraín, quien operó a Frei Montalva, aseguró que, tras la intervención, que a su parecer fue «exitosa», apareció en forma repentina una complicación «bastante extraña» en momentos en que su estado de salud se «estaba normalizando».

A partir de esta premisa, Carmen Frei señalaba que en los días en que su padre estuvo hospitalizado, se recibieron extrañas llamadas. Esto se entrelazó con los datos contenidos en el libro de Cristian Gazmuri, “Eduardo Frei Montalva y su Espoca” y se transformaba en una polémica de carácter político. Mientras Carmen Frei acusó a Gazmuri de herir la memoria de su padre al señalar que había justificado el golpe militar y omitir las dudas de su familia, el historiador respondía a los 167 ataques.

“Yo comparto esa duda pero no encontré ninguna prueba definitiva, ni clara, ni una semi prueba de que eso ocurrió. Solamente presunciones, porque muere muy poca gente de esa enfermedad y porque se le complicó en forma muy extraña la cosa. Pero pruebas no encontré ninguna. El doctor Alejandro Goic, a quien entrevisté, me dijo que él estaba convencido que don Eduardo murió por una infección por el bacilo coli. Esa es la opinión del doctor Goic, por lo tanto yo no puedo decir que asesinaron a don Eduardo”¹¹¹, dijo Gazmuri.

UNA EXTRAÑA CASUALIDAD

El ex militante del MIR, Ricardo Aguilera, miraba la televisión en su hogar cuando en las noticias de Canal 7 apareció Carmen Frei exponiendo la teoría sobre la muerte de su padre. Quedó sorprendido.

Su asombro no era menor. En diciembre de 1981 había estado, al igual que su hermano Elizardo, al borde de la muerte debido a una extraña enfermedad, mientras estaban detenidos en la galería N° 2 de la ex Cárcel Pública por Ley de Seguridad Interior del Estado. Por la misma situación pasó quien fuera el jefe de las Milicias de Resistencia del MIR, Guillermo Rodríguez Morales, El Ronco, junto a Adalberto Muñoz Jara. El ronco fue trasladado al hospital de la cárcel. Se le llevó un monitor para vigilar su ritmo cardíaco, pero misteriosamente el aparato hizo explosión. Todos lograron salvarse gracias a la red de contactos de la Vicaría de la Solidaridad y abogados del Codepu, quienes lograron obtener la antitoxina en Atlanta, Estados Unidos y Argentina. Pero los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz no tuvieron tanta suerte y fallecieron por botulismo. En todo caso, en sus actas de defunción se establece que la causa de la muerte se debió a “intoxicación aguda inespecífica”.

Elizardo Aguilera intentó comunicarse con la parlamentaria, pero no lo logró. Días más tarde habló con el sociólogo Tomás Moulián quien a su vez lo contactó con Eugenio Ortega, esposo de Carmen Frei. La frase fue clara. “A nosotros intentaron envenenarnos con algo parecido”. Ortega se interesó en el hecho y comentó su conversación con un conocido periodista radial quien entrevistó a los hermanos Aguilera, crónica que se sumó a la serie de notas relacionadas con el químico Eugenio Berríos y la muerte de Frei en radio Cooperativa. Elizardo Aguilera relató todos los pormenores del hecho y todo terminó allí, salvo por un detalle: Eugenio Ortega llamó a su abogado asesor, Alvaro Varela Walker y le relató la última información que había recibido, solicitándole ayuda.

EL “ENCARGO”

El subsecretario Jorge Burgos, en conocimiento de la petición de Carmen Frei y del relato del ex mirista, explicó la situación a los convocados. En concreto, había que tomar en cuenta lo dicho por su “camarada”, sobre todo, porque no podía quedar en el aire la posibilidad de que la DINA hubiera usado venenos como método de eliminación de personas, aunque esa práctica está ampliamente expuesta en varios procesos judiciales. Pero lo que más complicaba la reunión era que las pótimas letales se hubieran fabricado en el Instituto de Salud Pública (ISP), otrora conocido también como “El Bacteriológico” o en el Complejo Químico del Ejército, ubicado en Talagante. Burgos

encomendó entonces a Mery que designara a los detectives más capaces de su institución para que hicieran una indagatoria “reservada” para el ministerio y determinar si existían antecedentes para sostener que Frei padre pudiese haber sido envenenado por la DINA. La orden estaba dada. Los mecanismos punitivos habían iniciado su rodaje. Mery pensó que la orden era perentoria. Había que actuar con rapidez, sigilo y las “reservas” del caso. Se supone que una investigación solo la pueden iniciar los tribunales de justicia, pero el ministerio siempre pedía “cositas” de este tipo. El “señor director”, como se le suele llamar en el mundo 169 policial a Mery, tenía claro a quién designaría, pero aún debían producirse algunos cambios institucionales tendientes a “enfriar” a algunos de sus funcionarios “estrella”, como reposicionar a otros que por sus méritos, buenas notas y cursos en la Academia Policial, debían asumir mayores responsabilidades. Así, el jefe del Departamento Quinto (DV), Pedro Valdivia, que había logrado entre otras cosas aclarar la llamada Operación Albania, como también el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez –develando la secreta estructura de Inteligencia del Ejército–, fue derivado como jefe a la Brigada de Homicidios. El sucesor, entonces, debía ser alguien que tuviera la experiencia, el tino y la sagacidad necesarias para enfrentar la solicitud del “subse”.

Mery, con los nombres en la memoria y los cambios internos ya decretados, concurrió a una segunda reunión con Burgos. Pero esta vez no se hizo en el palacio de La Moneda, sino en el último piso del edificio lila perteneciente al Consejo de Defensa del Estado, que adorna la pasada por la Carretera Panamericana que surca el centro de Santiago. En el encuentro estaban casi los mismos, salvo por dos detalles. Primero, porque a la reunión se sumó la presidenta del organismo Clara Szczaranski. Y segundo, porque también concurrieron los “elegidos” de Mery: detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo.

Este último, el recién nombrado jefe del Departamento Quinto, entidad interna con amplio bagaje en la indagatoria de los desaparecidos servicios de inteligencia del régimen militar. Jofré, en tanto, fue sacado desde Interpol, para una sui generis “comisión de servicios”.

Tanto Castillo como Jofré habían trabajado de cerca con el ministro Adolfo Bañados en la investigación que condenó al general ® Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, como autores intelectuales del homicidio al ex canciller Orlando Letelier en Washington, en 1976. También habían asesorado de cerca en los casos Leighton y Soria, como también al ministro de fuero Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que sometió a proceso a Augusto Pinochet Ugarte.

La conversación sobre la muerte de Frei a manos de la 170 DINA estuvo llena de posibles líneas de investigación que podían seguirse. Sin embargo, lo que más complicaba a los presentes era contar con una orden judicial que formalizara el procedimiento. Pero aún más difícil era conseguir que personas vinculadas al ISP pudieran contar algunas de las cosas que sabían sobre eventuales acciones del Ejército en el “bacteriológico”.

La reunión terminó y algunos rostros tenían sonrisas socarronas por el desafío que significaba indagar tres áreas distintas: las armas químicas durante la dictadura militar, la posibilidad de que estas se hubieran usado contra Frei u otras personas y lo más importante, reactivar la espina que Castillo y Jofré tenían en su corazón policial: el caso Berríos.

DILIGENCIA OFICIOSA

Poco se había hecho en el caso Berríos desde 1997. Es decir, habían pasado casi cuatro años sin que el proceso se moviera ni judicial ni policialmente hablando. Lo último que recibió la magistrada del Sexto Juzgado del Crimen Olga Pérez, había sido un exhorto desde Uruguay donde se mencionaban los teléfonos a los que Berríos o Carlos Herrera Jiménez había llamado desde Uruguay a Chile. La diligencia para identificarlos, en manos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones había sido bastante mediocre. Había tardado cerca de un año y nada se había logrado. El caso necesitaba urgente una reactivación para aclarar cuál había sido la real participación de los ex DINA o eventualmente del Ejército en la desaparición y muerte de Berríos. La reunión entre el director de la Policía de Investigaciones Nelson Mery, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE),

Clara Szczaranski, los detectives Rafael Castillo y Nelson Jofré, junto a los asesores del subsecretario del Interior, Jorge Burgos, comenzaba a dar sus primeros frutos.

HABLANDO EN CONFIANZA

Corría diciembre de 2000 cuando Jofré llegó al Instituto de Salud Pública (ISP). Su misión era encontrar antecedentes que confirmaran que Eugenio Berríos había envenenado a Eduardo Frei Montalva, tal como se lo había solicitado el Ministerio del Interior.

La diligencia realizada por Jofré, era de carácter oficioso, ya que no contaba con autorización judicial para efectuarla. Jofré, gracias a la ayuda proporcionada por el entonces director del ISP, doctor Gonzalo Navarrete (actual subsecretario de Salud), logró entrevistar a un alto número de funcionarios. Y las sorpresas abundaron.

El primero en ser “entrevistado” fue el químico farmacéutico, Marcos Poduje Frugone, quien trabaja actualmente en el departamento de liofilización.

Este procedimiento consiste en deshidratar sustancias sin utilizar calor. Es decir, el producto se congela, se somete a un alto vacío, se sublima el hielo y se deja seco el producto y convertido en polvo. El profesional entregó una pista que sorprendió a Jofré, porque revelaba cómo los coroneles Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo –director y jefe de seguridad, respectivamente– pudieron haber colaborado con la DINA y luego la CNI para la fabricación de armas químicas en el Complejo que el Ejército tiene en Talagante, desde sus puestos como jefes del Bacteriológico.

“En el año 1981, entre el 22 de julio y el 7 de agosto, el comandante Fuenzalida me telefoneó para que fuera a buscar un paquete a la Cancillería. En esos días yo me hallaba con yeso, por lo que me trasladé en auto hasta el lugar.

La Cancillería estaba en La Moneda, donde se me hizo firmar un documento y se me entregó un paquete pequeño. Al llegar al Instituto abrí el paquete y extraje un tubo con la leyenda Clostridium Botulinum, el que procedí a guardar inmediatamente en el refrigerador por tratarse de una bacteria bastante peligrosa”, recordó. Jofré escuchaba atentamente la declaración del químico cuando el broche de oro, despertó aun más sus sospechas.

“Al lunes siguiente me dirigí con el tubo en cuestión hasta la oficina del jefe del Laboratorio, Hernán Lobos, pensando que él las había solicitado. Sin embargo, él desconocía el hecho así que procedí a preguntarle al coronel Larraín, quien se molestó porque tenía las toxinas y discutimos. El coronel se quedó con las toxinas y nunca supe qué pasó con ellas y quién las había pedido”, siguió.

Las palabras del profesional causaron un inmediato cruce de informaciones entre la toxina botulínica y la denuncia que había recibido Jofré sobre la muerte de dos reos comunes que compartieron comida con los militantes del MIR a fines de 1981. No terminó de pensarlo cuando Poduje casi le sacó las palabras de la boca.

“Esta situación con las toxinas me llamó la atención y meses más tarde la relacioné, leyendo la prensa, con la intoxicación de unos militantes del MIR”, dijo Poduje al detective. Jofré también la relacionó inmediatamente con la declaración que alguna vez leyera en el proceso por el homicidio de Orlando Letelier prestada por el ex agente de la DINA, Michael Townley ante la fiscalía de Estados Unidos, el 14 de marzo de 1978.

“Después de mis viajes por Europa a fines de 1975 me dediqué en forma casi exclusiva al desarrollo del Sarín y a terminar el laboratorio de la casa de vía Naranjo y la planificación de productos como el Sarín y el Tabún y de elementos de alta toxicidad como Clostridium Botulinum, entre otros”, relató Townley a los fiscales en su país.

MORTAL EN ÍNFIMAS CANTIDADES

El botulismo es una grave enfermedad causada por una neurotoxina que es producida por el bacilo Clostridium botulinum, el mismo que debió buscar en La Moneda el químico Marcos Poduje.

La toxina es extremadamente potente, incluso mortal en ínfimas cantidades. Bloquea la liberación de una sustancia 173 llamada acetilcolina en las terminaciones nerviosas, con lo que paraliza los músculos y puede llevar a la muerte por un paro respiratorio.

Básicamente la toxina puede producirse en las conservas que han sido golpeadas o en alimentos que pasan mucho tiempo guardados. Sin embargo, en el caso de los miristas intoxicados, no se daban ninguno de estos preceptos.

La información entregada por Poduje daba la impresión de que el Bacteriológico pudo haber sido usado por la DINA para fabricar venenos y la mejor sospecha estaba por venir. “El coronel Larraín me solicitó que reparara el liofilizador.

Cuando lo arreglé, el uniformado me ordenó que lo llevara hasta la Vicaría de Carabineros, ubicada en calle San Isidro donde lo recibiría un veterinario.

Finalmente, como no estaba quien lo recibiría quedó detrás de un altar.

Desconozco qué sucedió con el aparato. Posteriormente, el coronel Larraín me asignó un militar de baja graduación que aprendió a ocupar el liofilizador”, recordó Poduje.

La idea investigativa estaba clara. Si se pudo liofilizar la toxina botulínica, bien podría haberse echado en los alimentos de los miristas que estaban en la ex Cárcel Pública. Nadie lo habría notado, pensó Jofré.

El detalle era aun más sabroso, ya que uno de los presos en la cárcel era nada menos que Guillermo Rodríguez Morales, quien en 1981 estaba procesado por la fiscalía militar y con un Consejo de Guerra que lo condenaba a muerte. Y peor, al caso de los miristas solo se sumaba otro de unas monjas que se prepararon sus propias conservas. Es decir, solo dos casos botulismo se conocen en el siglo 20, en Chile. La afirmación le fue dicha a Jofré por la bioquímica de la Universidad de Chile, María Eugenia Valenzuela.

Lo que la policía no reparó fue que Valenzuela conoció de cerca a Eugenio Berríos Sagredo.

Se insistió en la búsqueda de información sobre los reos muertos por botulismo y se requirió el proceso judicial, rol 136.311, incoado en el Tercer Juzgado del Crimen. Sorpresa: estos ya no existían, se habían quemado misteriosamente.

Otro muro se levantaba en el camino, como si alguien se hubiera dedicado a borrar las pistas sobre el uso de la toxina, esta vez era la declaración de la química farmacéutica María Marambio Leiva.

La mujer fue precisamente la que debió auscultar primariamente a los miristas en la ex Cárcel Pública y quien determinó el botulismo como origen de la intoxicación. “Cuando estaban hospitalizados en la Posta Central y bastante enfermos, concurrí al Servicio Médico Legal para buscar un trozo del intestino de uno de los dos reos que fallecieron a causa de la enfermedad. Pero no se guardaron”, declaró. Para esta investigación se tuvo a la vista las dos fichas de defunción elaboradas por los tanatólogos del SML. Firmadas por la doctora América González, se señala claramente que los intestinos se guardaron para eventuales exámenes. ¿Quién los hizo desaparecer?, es la pregunta que nunca podrá aclararse.

¿Pero dónde entraba Berríos en esta historia? ¿Cómo se vinculó Berríos con el Bacteriológico para, presumiblemente, asesinar a Frei? ¿En qué forma usó el Ejército el Bacteriológico? Pequeños detalles irían dando luces que aumentaban la posibilidad de reactivar el proceso.

LOS AMIGOS

De las “entrevistas” fluían datos e informaciones que aumentaban las sospechas de la policía. Por ejemplo, las entregadas hechas por el médico veterinario Sergio Romero Medel, especialista en el manejo y uso de animales de laboratorio.

Romero le confidenció a Jofré que en 1980 llegó un veterinario del Ejército, identificado como Sergio Rosende, amigo del jefe de seguridad del ISP, para que le entregara ratones de laboratorio.

Romero inicialmente se negó, pero el coronel Larraín le ordenó taxativamente que se los diera, además sin documentos que respaldaran la entrega; Sergio Romero respondió a la orden, haciéndolo en varias oportunidades.

El hecho confirmaba, en cierta medida, la posibilidad de que el bacteriológico pudiera haberse usado para actividades “extrainstitucionales”.

Pero la sorpresa vino cuando Romero aseguró que el doctor Harmutt Hopp, uno de los jefes de la Colonia Dignidad, concurreó, en la década de los 80, en varias oportunidades a comprar conejos de laboratorio.

Hasta ese punto, Jofré solo tenía sospechas que podrían producir nuevas líneas de investigación, pero ninguno de sus entrevistados había conocido a Eugenio Berríos. No todo estaba perdido, porque las conexiones del químico llegarían por boca de otro funcionario: el farmacéutico Manuel Sepúlveda Rieloff. Rieloff, ex militante de las Juventudes Comunistas, conoció a Berríos en la Universidad de Concepción, hasta donde concurría durante su período de estudiante en busca de jugar con un grupo de amigos comunes.

La memoria se abrió haciendo surgir varios nombres, como César Drago, Renato Casas del Valle y Roberto Seltzer. Más aun, recordó que entre los años 75 al 78 Berríos lo visitó en su oficina del Bacteriológico.

El dato provocó suspicacias en Jofré, debido a la antigua militancia PC de Sepúlveda, como también por la confianza que tuvo Berríos para visitarlo en su lugar de trabajo. La “consulta” que hizo Berríos en esa ocasión versaba sobre la posibilidad de extraer el aceite del boldo para exportarlo al extranjero. La versión si bien es cierto coincide con las actividades que Berríos realizó en la década 80, abrió la brecha para sostener la posibilidad de que el químico estrella de la DINA hubiese usado sus contactos que hizo en la Universidad de Chile y Concepción para sus oscuras actividades. Otro funcionario del ISP que conoció a Berríos y que entregó información a Investigaciones fue el químico de la UDC, José Santiago Morales Inostroza.

Morales tuvo la posibilidad de conocer a Berríos en Concepción, y luego en la Universidad de Chile, en Santiago donde labora y donde Berríos realizó su tesis en Química Industrial.

“Recuerdo que a principios de los 70 viene la connotación política de Berríos y recibo noticias de que era alguien importante en Patria y Libertad. Por amigos me enteré que estaba fuertemente vinculado al general Roberto Viaux y después de su ida a Paraguay, lo acompañó en un avión de propiedad de Walter Thieme Schersand (hoy fallecido)”, dijo Morales al policía.

Su último encuentro con Berríos, recuerda Morales, se produce en la vía pública entre los años 1976 y 77 en Concepción, “cuando me pidió datos para extraer la esencia del boldo y me comenta que estaba trabajando en un proyecto sobre un estudio de mercado para exportarlo”.

LAS CONCLUSIONES

La investigación derivó en la redacción de un documento de quince páginas que lleva un timbre de “reservado” y que fue entregado a la senadora Carmen Frei, pero que aun no ha sido derivado a ningún tribunal del crimen.

El subprefecto Rafael Castillo Bustamante, jefe del departamento Quinto de policía civil, secundó en las siguientes conclusiones lo investigado por su subalterno Nelson Jofré. “Queda inconclusa la confirmación del uso y origen de las toxinas botulínicas que supuestamente fueron entregadas al coronel Joaquín Larraín Gana y Julio Lobos Romero. En esta indagación se hace necesario entrevistar al coronel ® de Ejército, señor Larraín y el comandante Jaime Fuenzalida Bravo. Este último fue invitado para entrevistarlos respecto de este hecho, no concurrendo. No existe documentación de respaldo de dicha entrega”.

“Queda inconcluso el destino y uso del liofilizador que supuestamente fue entregado al Ejército, no obstante que así lo afirmaron el doctor Marcos Poduje Frugone y la doctora María Isabel Vergara

Rojas. Se hace necesaria la entrevista del coronel Joaquín Larraín Gana y realizar las consultas al Ejército de Chile. No se halló documento de respaldo del aparato”. “Que por declaraciones de la tecnóloga médica María Soledad Prat Miranda y de su colega María Eugenia Valenzuela 177 Montero, recuerdan haber recibido una muestra clínica para su respectivo estudio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, proveniente de la clínica Santa María en 1981, cuando estuvo internado y después falleció. Sin embargo, por el transcurso del tiempo no existe registro de documentación”. “Que las declaraciones de José Santiago Morales Inostroza y Manuel Sepúlveda Rieloff, ambos químicos farmacéuticos del Instituto de Salud Pública (ISP), demuestran haber conocido a Eugenio Berríos Sagredo en la época de estudiantes universitarios. Proporcionan información en cuanto a que años después de sus estudios, Berríos tomó contacto con ellos tanto en Concepción como en el ISP, donde les señala indistintamente que se encontraba trabajando con la esencia del boldo para exportarlo. Estas declaraciones son concordantes con las anteriormente tomadas en la investigación por presunta desgracia en el proceso rol 7981 del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, donde consta que Berríos formó una sociedad comercial con Manuel Novoa Contador y Alberto Comunián Pivari con relación a este proyecto”.

“Que por disposiciones administrativas en el ISP se estableció que existen hasta cinco años los documentos en sus archivos”.

“Que las bacterias E. Coli, Proteus y el hongo Cándida, presuntamente encontradas en el cuerpo del ex Presidente Eduardo Frei, cuando estuvo internado y posteriormente falleció en la clínica Santa María, por declaraciones de los especialistas Walter Ledermann, Manuel Sepúlveda Rieloff, entre otros, señalaron que son bacterias intestinales y todas las personas las portan, de manera que producen infecciones permanentes en los centros hospitalarios. Sugieren como importante, realizar un estudio detallado de los protocolos postoperatorios de su ficha clínica cuando permaneció internado en el mentado centro asistencial, de preferencia que sea un especialista infectólogo y luego por el Colegio Médico”.

“Que se conoció la muerte de dos reos comunes presuntamente por toxinas botulínicas el 9 y 20 de diciembre de 1981. A saber, Víctor Hugo Corvalán Castillo y de Héctor 178 Pacheco Díaz, no obstante que el Servicio Médico Legal señaló en ambos casos ‘intoxicación aguda inespecífica’. Por otra parte la tecnóloga médica señora Eliana Gladys Marambio del instituto bacteriológico, quien otrora tomó contacto con los reos pacientes en su oportunidad y diagnosticó intoxicación por botulismo, intentó rescatar parte del intestino del primer fallecido en el Servicio Médico Legal para su estudio y análisis, no quedando en el SML muestra alguna para estudio de la posible causa de muerte del occiso”.

“Que por declaración de la tecnóloga médica María Eugenia Valenzuela Montero, especializada en botulismo en Chile, señala que la toxina botulínica, se trata de una de las toxinas más potentes que se conoce en el ámbito mundial. La ingestión de toxinas y otras bacterias que acompañan al Clostridium Botulinum en los alimentos indebidamente conservados o contaminados pueden producir dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas que preceden a los síntomas neurológicos como visión borrosa, disfonía, disfagia y debilidad de la musculatura periférica, en especial el cuello y extremidades. Y si la enfermedad es más severa puede comprometer la musculatura respiratoria”.

“Que se estableció la relación del director del Instituto Bacteriológico, coronel Joaquín Larraín Gana, con el Complejo Químico del Ejército de Chile, cuando dispuso el traspaso de la Plata de Éter y el contrato y traslado de un operario a dicha institución para trabajar en ella. También por declaraciones del doctor Marcos Poduje; doctora María Isabel Vergara; Dr.

Sergio Romero Medel, se mencionaron a algunos profesionales como el Dr.

Fernando Fábrega; Dr. Salvador Ballard, y los médicos veterinarios Dr. Méndez; doctor Sergio Lazo; Dr. Sergio Rosende, quienes se relacionaron con el Ejército y el Instituto Bacteriológico en aquellos años”.

“Que por declaraciones de las tecnólogas médicas María Soledad Prat Miranda y la Sra. Wally Silva San Martín, el cepario de la Sección Bacteriología a contar de mayo de 1999 cuenta con un registro de salida de cepas.

De años anteriores no hay documentación. Por declaración de José Santiago Morales 179 Inostroza las cepas que mantienen el ISP, no existen hasta ahora laboratorios o salas de extrema seguridad tales como BL-3 o BL-4, conforme a las normas de seguridad internacional de las Naciones Unidas para la destrucción de armas bacteriológicas, biológicas y tóxicas que, dice, son las únicas apropiadas para asegurar una completa bioseguridad”.

Las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Cuántas armas químicas pudo haber preparado el Ejército gracias a las franquicias que tenía el Bacteriológico? ¿Qué secretos guardan los funcionarios de ese recinto que temen a decirlos públicamente? ¿Para qué el Ejército requería toxina botulínica si es un veneno de alta peligrosidad? ¿Qué pasó con los elementos que fueron entregados en extrañas circunstancias a personas desconocidas? ¿Hasta dónde Eugenio Berríos usó el recinto para sus pruebas? ¿Qué pasó con la fabricación de Ether, un conocido solvente orgánico que se usa en la fabricación del clorhidrato de cocaína? ¿Por qué fue derivada al Complejo Químico del Ejército en Talagante? Estas interrogantes aún no tienen respuestas.